

El amotinamiento de las fuerzas policiales y las movilizaciones de los cocaleros prendieron la chispa en Bolivia. El futuro es apenas un nubarrón.

Bolivia: Una crisis violenta

Kathryn Ledebur

El 11 de febrero, la fuerza policial de La Paz se amotinó y decidió no salir de sus estaciones. Aunque esta fuerza había sido un aliado tradicional del partido gobernante, MNR, el poder creciente de las Fuerzas Armadas, a expensas del mantenimiento del orden interno y la crisis económica, había ocasionado un resentimiento de raíces profundas. Las fuerzas policiales de Cochabamba y Santa Cruz se unieron a la huelga al día siguiente. El "amotinamiento" se produjo en respuesta al anuncio del gobierno de Sánchez de Lozada de un nuevo impuesto de un promedio de 12,5 por ciento a ser deducido de los ingresos de la mayoría de empleados asalariados.

Los impuestos combinados y las deducciones salariales de la mayoría de bolivianos se elevarían a más del 30 por ciento. El anuncio del gobier-

no, resultado de la presión del FMI, vino justo después de la noticia de que los aumentos salariales de este año serían insignificantes. Luego de casi cuatro años de una crisis económica asfixiante, la medida fue la última gota. El clima político en la nación ya estaba candente. Más de dos semanas de diálogo con los sectores en protesta no habían conducido a conclusiones duraderas. Los cocaleros seguían reclamando que el gobierno solo utilizaba las negociaciones para ganar tiempo, seguían exigiendo una pausa en la erradicación de la coca y el derecho de cultivar una hectárea de coca legal por familia.

El líder cocalero y diputado Evo Morales y los empresarios privados se opusieron conjuntamente al alza del impuesto. Esta alianza poco probable refleja la gravedad de la crisis

y la incapacidad del gobierno de Sánchez de Lozada de implementar políticas de forma eficaz. Los sectores en protesta expresaron su frustración creciente, mientras la parte de "fondos reservados" de los presupuestos anunciados recientemente, así como el presupuesto militar, no se vieron afectados. Los fondos reservados no están sujetos a escrutinio público e incluyen bonos considerables no gravables para funcionarios del gobierno; a veces más de 10 000 dólares al mes. El hecho de que la familia del líder del partido de coalición UCS, Johnny Fernández, deba más de 10 000 000 de dólares en impuestos atrasados, solo

Kathryn Ledebur es directora de la Red Andina de Información en Cochabamba, Bolivia. También es consultora para la Oficina de Washington en Latinoamérica.



Fotos: Archivo La República

servió para exacerbar el descontento popular.

El 12 de febrero un grupo de manifestantes y policías ingresaron en la Plaza Murillo, en La Paz. Más policías inundaron el sector. Empezaron a oírse disparos y se inició una confrontación masiva entre la Policía y las Fuerzas Armadas, y francotiradores dispararon contra los manifestantes desde edificios circundantes. Más de treinta personas murieron y casi doscientas resultaron heridas, la mayoría de bala.

Aunque el Presidente suspendió el nuevo impuesto a las 4:30 p.m. de ese día, la violencia continuó. Los manifestantes exigieron la renuncia del Presidente y del vicepresidente. La ola de violencia se podría haber evitado si el gobierno hubiese

accedido antes a las demandas de los grupos en protesta. Los civiles empezaron a saquear la ciudad y prendieron fuego al Ministerio de Trabajo, oficinas de la Vicepresidencia, oficinas del gobierno municipal y diversas sedes de los partidos de coalición. El gobierno llegó a un acuerdo preliminar con la Policía Nacional cerca de la madrugada, y estas fuerzas reiniciaron sus deberes de conservación del orden. A medida que la violencia escalaba en La Paz, la policía militar dispersó violentamente en Cochabamba a más de 1000 marchantes de diferentes sectores en protesta por el aumento del impuesto. Los cocaleros del Chapare comenzaron a bloquear la carretera principal y los militares les dispararon a dos manifestantes y mataron a otro.

Durante el caos que crecía rápidamente, los planes de los altos niveles del gobierno boliviano por terminar el conflicto brillaron por su ausencia. La ola de violencia podría haberse evitado si antes de anunciar un alza en los impuestos se hubiera efectuado un recorte en los gastos del gobierno y en los puestos ministeriales. Lamentablemente, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada esperó hasta el domingo 16 de febrero para anunciar que el gobierno disminuiría los gastos y crearía un nuevo presupuesto que no se vería influenciado por el FMI. En respuesta a la violencia, los funcionarios del gobierno boliviano anunciaron que el FMI había disminuido su demanda de una reducción en el déficit fiscal de 8,6 a 6,3 por ciento para el 2003 y prometió aproximadamente

ochenta millones de dólares para ayuda del balance de pagos (*El Diario*, 24/2/03). El mandato débil del gobierno y la fricción continua con el miembro principal de la coalición, el partido MIR, impidieron una acción rápida y decisiva.

El trasfondo: La política de erradicación de la coca

Aunque la violencia y las protestas del 12 y 13 de febrero atrajeron la atención internacional a la crisis, las raíces de los problemas económicos de Bolivia y los patrones de protesta y violencia son más profundos, ya que están relacionados de manera compleja con los asuntos de la política de erradicación de coca financiada por los Estados Unidos. Hasta fines del 2002 Estados Unidos consideraba a Bolivia como su mayor éxito latinoamericano en la lucha antidrogas, con la erradicación forzosa de más de 40 000 hectáreas de coca en la región. Pero el precio del éxito ha sido demasiado alto. Los programas de desarrollo alternativo para proporcionar medios de subsistencia a la población afectada no han estado a la altura de los grandes logros de la erradicación en el Chapare, la región productora de coca más grande del país. La erradicación de los cultivos de coca ha resultado también en la pérdida de más de quinientos millones de dólares para la economía de Bolivia.

El gobierno de Sánchez de

Lozada heredó un conflicto cíclico de protesta y represión del gobierno a los coccaleros. En un esfuerzo por romper este ciclo, el gobierno y los líderes coccaleros iniciaron un diálogo extenso a mediados de septiembre del 2002. Los grupos llegaron a un consenso en ciertos aspectos claves; sin embargo, todavía quedan otros temas de primera importancia por resolver, tal como la demanda de los coccaleros de desmilitarizar el Chapare, región de cultivo de coca, y de una pausa en la erradicación forzosa.

La participación del gobierno en el diálogo reflejó la nueva autoridad política del MAS como resultado de las victorias en el Congreso y la debilidad de la coalición del gobierno. En las elecciones de junio del 2002, el partido político MAS ganó veintisiete de los 130 escaños en la Cámara de Diputados y ocho de los veintisiete escaños del Senado, lo que lo convirtió en el segundo bloque más grande del Congreso boliviano. En la contienda



Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente boliviano.



Evo Morales, diputado y líder de los coccaleros.

presidencial, el líder del partido, Evo Morales, estuvo solo uno y medio puntos porcentuales detrás del ganador. El MAS obtiene gran parte de su apoyo de los coccaleros y de un gran electorado descon-

tento con los partidos tradicionales y las políticas económicas aplicadas en Bolivia.

Luego de que los funcionarios estadounidenses expresaran su oposición a cualquier interrupción en los esfuerzos por reducir la coca, las conversaciones fracasaron. Como resultado, el 13 de enero los coccaleros y otros sectores sociales empezaron a bloquear los caminos por todo el país. Once personas fueron muertas y muchas resultaron heridas.

El 14 de febrero, los representantes del gobierno declararon que podrían permitir la producción de aproximadamente ochocientos metros cuadrados de coca por familia en el Chapare durante un estudio de seis meses de los mercados de coca tradicionales y legales. La oferta fue en respuesta a la propuesta de los coccaleros, lanzada el 9 de febrero, de erradicar voluntariamente todos los campos de coca, dejando una hectárea por familia. Aunque la propuesta del gobierno representa una flexibilidad mayor, no queda claro si esto ocurrirá realmente.

Los funcionarios estadounidenses declaran de manera consistente una oposición a cualquier cambio en la política de erradicación. Un miembro de la rama ejecutiva boliviana admitió: "Estamos entre la espada y la pared. Por un lado, tenemos la presión social de los coccaleros, y por el otro, la

El "amotinamiento" se produjo en respuesta al anuncio del gobierno de Sánchez de Lozada de un nuevo impuesto de un promedio de 12,5% a ser deducido de los ingresos de la mayoría de empleados asalariados.

presión internacional". Otto Reich, entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que "una pausa en la erradicación influiría en las relaciones [entre los Estados Unidos y Bolivia] porque para nosotros [el gobierno de los Estados Unidos] la erradicación de coca ilegal es muy importante". En puntos claves para las negociaciones, los dictados de la política antidrogas de los Estados Unidos impiden acuerdos duraderos.

Además, la impunidad arraigada promueve la violación de los derechos humanos, ya que no existe ningún impedimento para el uso excesivo de la fuerza u otros abusos por parte del personal de las fuerzas de seguridad, quienes aún tienen que enfrentar las consecuencias legales. Los monitores de los derechos humanos en Bolivia también temen que, a pesar de las investigaciones paralelas realizadas por la fiscalía, la fuerza militar y la OEA, la impunidad reinará en las muertes del 12 y 13 de febrero.

Conclusión

Debido al fracaso del Presi-

dente para responder de manera eficaz al levantamiento violento del 12 y 13 de febrero y a las demandas de los coccaleros, los sectores en protesta siguen insatisfechos y Goni no parece equipado para lidiar con sus demandas.

La gran mayoría de los bolivianos ha perdido la fe en la capacidad del Presidente para gobernar el país. Inclusive sectores de su propio partido han intentado distanciarse. El descontento público y la incertidumbre van en aumento, pero ningún líder importante de la oposición ha ganado un amplio apoyo. A pesar de las demandas de un cambio en el gobierno, no existen alternativas claras. La presión internacional impediría la renuncia del Presidente. Cualquier líder nuevo heredaría los problemas económicos y sociales intensos que afronta este gobierno, así como la fuerte presión internacional de los Estados Unidos y de organismos financieros internacionales, lo que ha agravado la crisis. Es probable que el conflicto brote nuevamente en marzo o abril. (Traducido por Yessica López Tirado.) ▲